

Estudios Sociales
 Año XXV, Números 89/90
 Julio-Diciembre 1992

LA SITUACION RURAL DOMINICANA

Eduardo García Tamayo, S.J.*

José Ramón Rodríguez**

I. El impacto de los cambios en el medio rural dominicano

En las últimas tres décadas, la sociedad dominicana ha experimentado cambios y transformaciones en sus estructuras que han impactado significativamente en los diversos sectores del país.

El despliegue histórico de un modelo desarrollista ha fomentado en la República Dominicana un proceso sostenido de urbanización y un creciente desequilibrio campo-ciudad. Este desequilibrio inducido ha provocado un acelerado proceso de descampesinización. En 1920, la población rural representaba el 83,4% de la población total del país. En 1976, ya había descendido a 60,3% y en el censo de 1981 había caído a 48%. Proyecciones realizadas asignan a la población rural un 41% del total nacional para 1991.

A medida que se ha ido produciendo una considerable emigración campesina a las ciudades, la pequeña *unidad campesina*, generadora de una buena parte de la alimentación básica del país, ha sido afectada.

* Sacerdote Jesuita, antropólogo y párroco de las parroquias de Loma de Cabrera y Restauración.

** Lic. en Ciencias Agrícolas. Trabaja en Caritas Mao-Montecristi.

Se ha ido creando así un problema rural cuyas causas deben ser buscadas en dos factores estructurales: la estructura de tenencia y uso de la tierra y los modelos de desarrollo. En el presente artículo nos proponemos examinar los efectos de estas causas sobre el campesinado dominicano en los últimos 10 años.

1. La estructura de tenencia y uso de la tierra.

El sistema dominicano de distribución de la tierra está considerado como uno de los más injustos del mundo.

En 1971, la propiedades de menos de 8 tareas constituían el 16.2% del total de las propiedades del país y ocupaban el 0.5% de las tierras cultivables. mientras que el 81.7% de las propiedades sólo abarcaban el 12.1% de la superficie cultivable.

De los 42.5 millones de tareas (2.6 millones de has.) de tierras cultivables, el 44.7% está dedicado a la ganadería. Unos 194 propietarios poseen 5.4 millones de tareas, mientras que 409,959 campesinos carecen de tierra (Rodríguez f., 1987).

Estos datos revelan con claridad la profundización en el tiempo del binomio latifundio-minifundio en la República Dominicana.

Desde el año 1962 se ha venido aplicando en el país la denominada "Reforma Agraria" a través del Instituto Agrario Dominicano (IAD), organismo estatal a cargo de dicha reforma. Sin embargo, las estadísticas revelan que el IAD no ha sido capaz de alterar significativamente la situación de la propiedad de la tierra.

De 1961 a 1991, el Instituto Agrario Dominicano ha captado 8.2 millones de tareas y distribuido 6.7 millones de tareas favoreciendo aproximadamente a 78,218 familias que representan sólo el 2.6% de la población campesina. Esta cifra no alcanzó a satisfacer la demanda de tierra existente en 1972.

La situación descrita ha sido históricamente la mayor limitante del desarrollo y el bienestar rural dominicano, pero no la única, como veremos a continuación.

2. Los modelos de desarrollo

Los diversos modelos de desarrollo que han sido implementados en el país han servido también para obstaculizar el desarrollo del campo dominicano. Los estilos de acumulación de capital, tanto interno como externo, han favorecido el espacio urbano, discriminando y excluyendo el espacio rural de la estrategia de desarrollo nacional.

El modelo agropecuario que se ha implementado en las últimas dos décadas es un modelo concentrador de los ingresos y de los recursos rurales en grupos minoritarios de capital transnacional y del gran capital nacional.

Desde la década de los setenta, la agropecuaria dominicana padece una fuerte crisis. La participación del sector en el PBI nacional cayó de 23.2% en 1970 a 15% en 1990, mientras que el empleo agrícola se redujo de 43% a 23% en el mismo período.

Los ajustes estructurales fondomonetaristas han impactado muy negativamente la economía campesina y todos los aspectos de la vida rural. Los indicadores de bienestar social se han caído por debajo de los parámetros comparativos.

La consolidación del modelo agroexportador impulsado por el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe y las instancias gubernamentales han provocado una reducción sostenida de los rubros tradicionales de exportación (azúcar, café, cacao y tabaco) y de los productos de la alimentación básica.

En la década de los ochenta, la producción alimentaria se redujo al ritmo de 1% anual, equivalente a 10% en los diez años transcurridos. Esto se debe fundamentalmente a que ha sido desatendida la pequeña unidad de producción, que genera más del 80% de los alimentos de consumo interno y se ha priorizado la gran propiedad, orientada a la producción de rubros no tradicionales para la exportación (piñas, naranjas, melones y vegetales).

El modelo agroexportador ha contribuido a la modificación del patrón de consumo de los dominicanos. Las preferencias del mercado se inclinan hacia los rubros de las agroindustrias, dejando de lado la

producción de la economía campesina en detrimento de los ingresos y el bienestar de los habitantes rurales.

A la economía campesina le han asignado el rol de generadora de excedentes a través de la oferta del producto y de la mano de obra para transferirlos al sector urbano-industrial, sin recibir los beneficios de ese proceso de acumulación (Rosario, 1990).

Como es evidente, la crisis rural no es el producto de un solo factor, sino de un conjunto de factores y fenómenos con raíces estructurales que se complementan unos a otros, como es el caso de la estructura agraria y el modelo agroexportador. La estructura agraria existente facilita la operación del modelo agroexportador y éste, a su vez, consolida la concentración de la tierra.

II. Los cambios en el medio rural

1. La población rural.

En los últimos 70 años, la población dominicana ha aumentado en más de un 600%. Los 894,000 dominicanos censados en 1920, llegaban en 1981 a la cantidad de 5,647,977 habitantes. De éstos, el 52% conformaba la población urbana. La población rural -48%- comprendía 2,712,117 personas (Vargas: 28). Se estima que la población rural consiste actualmente en unos 3,047,436 habitantes, pero su proporción en la población total del país es cada vez menor. La República Dominicana ya ha dejado de ser un país mayoritariamente rural. La sociedad urbana tiene una influencia cada vez mayor en el conjunto de la población dominicana.

Por lo que se refiere a la participación del campesinado en la vida económica del país, se puede observar que la mano de obra rural ha ido *decreciendo relativamente* en los últimos años. En 1981, era estimada en un 46.3% de la PEA del país. Para 1990, se calculaba en un 39.4%, o sea, unas 969,000 personas (Vargas: 30), de las cuales, más de la mitad (56%) consistía en agricultores y menos de la mitad (44%) en trabajadores no agrícolas (servicios, comercio, etc.). Otros estudios estimaban ya

para 1989 que el sector agrícola sólo comprendía un 26.1% de la PEA (Rodríguez Núñez:10).

Sin embargo, la PEA rural, que antes tenía en las tareas agrícolas un trabajo garantizado, ha encontrado condiciones más adversas. En 1976, la tasa de subempleo rural se estimaba en 63.6%, mientras que cerca de un 26% del PEA rural permanecía desempleada para 1981 (Vargas:43).

Desempleo y falta de tierra tienen una relación directa: los campesinos sin tierra conformaban un 29% de los trabajadores agrícolas (Ibid:39).

2. Características del campesinado

Si pasamos de la consideración de la población rural en su conjunto a la observación de las familias rurales, encontraremos algunos detalles que resaltan.

2.1 Composición familiar

La familia campesina ha ido cambiando algunas de sus características más notables en las últimas décadas. En una encuesta publicada en 1990 (Cross Beras:14), el 47% de las familias informó tener de uno a 4 hijos, mientras que el 37.6% reportó de 5 a 9 hijos.

La familia campesina tradicional, con una prole que oscilaba entre los 8 y los 12 hijos vivos, sin contar los fallecidos, es algo prácticamente desconocido entre las parejas formadas en la década de los 80's. En ésta, la esterilización de la mujer es algo relativamente común a partir del tercer o cuarto hijo. Y es algo más frecuente cuando se trata de una segunda unión para alguno de los miembros de la pareja, especialmente para la mujer.

La pareja campesina parece recurrir a la esterilización con más frecuencia que a otros métodos de control natal. En parte, esto se debe a la naturaleza permanente del método y a su sencillez. Una vez realizada la operación, la pareja se desentiende del asunto. También se debe al miedo de la mujer campesina a los efectos secundarios de las pastillas

y mecanismos contraceptivos. La oposición oficial de la Iglesia Católica a las prácticas artificiales de control de la natalidad no se ha hecho sentir en forma decisiva en las decisiones que toman las parejas. Por último, una gran cantidad de médicos inclinan a las mujeres campesinas a recurrir a este método antes que a otros.

El tipo de unión de la pareja tiene que ver con la duración de la misma. En una encuesta realizada sobre el campesinado, se halló que el jefe de familia se casa tardíamente. Antes de los 54 años, el jefe de familia tiende a mantenerse en unión libre, consensual. Pero, a partir de entonces, el patrón de unión conyugal cambia. El matrimonio legal o religioso se convierte entonces en un tipo de unión más frecuente (43%) que la unión consensual (28%; Cross Beras: 13).

2.2 La pobreza

La pobreza sigue siendo algo inherente a la vida campesina dominicana. La gran mayoría de las familias habita en casa propia (78.2%), que suele hallarse en estado regular y malo (70%). Son más numerosas las familias que se abastecen de agua en fuentes artificiales, como ríos, arroyos y manantiales (39%) que las que la reciben de un acueducto (32%). Algo más de la tercera parte (36%) recibe energía eléctrica de la corporación estatal (CDE), que monopoliza el servicio hasta la fecha. El 89% de las familias cocina con carbón vegetal (22%) y leña (67%; Cross Beras: 10-11). Las condiciones de vida en relación a los servicios básicos, pues, no han variado significativamente para la población rural en la última década. El campesinado sigue siendo sector poblacional al margen de los servicios a que tiene acceso, al menos en forma intermitente, la población urbana de bajos ingresos.

La población rural menor de 29 años se halla alfabetizada en un 93%, testimonio del auge de la educación en las últimas décadas, a pesar de las crisis que periódicamente sacuden al sector educativo público, poco motivado y mal remunerado. En cambio, en la población rural de 30 a 59 años, los alfabetizados son sólo el 80%, descendiendo al 65% en la población de 60 años y más (Cross Beras: 12). Hay estudios que atribuyen un 42% de analfabetismo al conjunto de la población rural

dominicana, porcentaje que aumenta drásticamente (85%) en las áreas rurales más pobres, como en el Suroeste árido del país (IICA: 39).

Si nos fijamos en el grado de escolarización, el 75% de la población rural sólo ha realizado algunos de los cursos de la educación primaria. El 19% ha llegado a la educación secundaria. Y sólo el 2% ha podido arribar al nivel universitario.

Otro dato importante es el de la nutrición. Casi la mitad de la población rural (49%) ingiere diariamente una cantidad de calorías (1424) y de proteínas (28.3 gm). que constituye alrededor de la mitad de lo requerido (Bendezu: 82).

Así, la población rural dominicana, constituida por unos 159,140 hogares distribuidos en unas 644 secciones o demarcaciones rurales y en unos 8,706 parajes o "comunidades" sigue siendo una población generalmente pobre (Ibid).

El 75% de esta población campesina -unos 2,863,000- se halla por debajo de la línea de la pobreza. Se trata de hogares cuyos gastos sobrepasarían los ingresos y cuyas necesidades vitales no son, por consiguiente, mínimamente satisfechas (IICA: 20-22).

En una encuesta realizada por el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF: 6 y 15), se halló que el 67% de los hogares estudiados no poseía tierra. El mismo porcentaje carecía de agua corriente, y el 55% tenía un único dormitorio por vivienda.

La imagen presentada por estos datos es la de una población con poca escolaridad, alimentación deficiente, que apenas recibe alguno de los servicios básicos que en los centros urbanos se consideran indispensables.

2.3 Formas de producción

El sistema agrario campesino¹ siempre ha estado orientado a la satisfacción de las necesidades de la unidad familiar y, al mismo tiempo, ligado a una economía de mercado. El ideal del campesino dominicano tradicional consiste en trabajar independientemente. Esto supone tener tierras propias para mantener a la familia, para emplear en ellas prepon-

derantemente la mano de obra familiar y para tener una producción suficientemente diversificada como para responder a la vez a las necesidades domésticas, a las demandas del mercado y a las condiciones impredecibles, tanto climatológicas como políticas, que rodean la existencia campesina.²

En los últimos años, este sistema agrario campesino se ha visto sometido al efecto de fuerzas económicas, sociales y políticas como nunca antes. La intervención del Estado se ha hecho sentir en formas cada vez más determinantes. En algunos casos, el Estado interviene directamente en las condiciones mismas de la vida campesina. En otros, la acción estatal sobre otros sectores de la sociedad y de la economía dominicanas produce efectos secundarios sobre el campesinado.

En el primer caso, los impuestos estatales a los productos de exportación tradicionales, la lentitud del proceso de Reforma Agraria y las restricciones crecientes de la Dirección General de Foresta a la agricultura tradicional de tumba y quema han desalentado las actividades económicas del campesinado. El consumo de fertilizantes, por ejemplo, ha ido disminuyendo en el país. En el período de 1969-1971 a 1983, el consumo de abonos por hectárea de tierra arable y cultivos permanentes cayó de 354 a 288 gm, mientras que en la mayoría de los países de América Latina se daba una tendencia inversa para el mismo período (Espinal: 80). Esto tiene implicaciones directas en la caída de los rendimientos del sector agrícola (Ibid: 51).

En el segundo caso, la política estatal orientada a la sustitución de importaciones incluyó una rígida política de salarios bajos. Esto conllevó una política de precios bajos en los productos agrícolas (Espinal: 19). Entre el productor campesino y el consumidor urbano, el Estado dominicano siempre ha optado por favorecer al segundo en forma que perjudica al primero.

Al mismo tiempo, la importancia dada por el Estado a los otros sectores económicos -el turismo, la industria- y el relativo auge experimentado por éstos, hizo que el sector agropecuario tuviera un peso cada vez menor en la actividad económica del país, pasando de un 23.2% del PBI en 1970 a un 16.9% en 1985 (Espinal: 34).

La inversión estatal en servicios públicos -salud, vías terrestres, vivienda, agua potable, prácticamente nula en electricidad- ha favorecido claramente a las zonas urbanas en detrimento de las rurales. Los medios de comunicación, que llegan a la antena de televisión que se levanta del techo de cana del bohío campesino transmiten imágenes de otro país, de una república que parece crecer en las ciudades mientras que en los campos no surge nada nuevo.

La emigración campesina a las ciudades ha sido un proceso in crescendo. El joven campesino abandona los estudios secundarios para irse a trabajar a una zona franca, donde gana unos cientos de pesos cada semana sin necesitar, al parecer, una educación formal. Ha habido así un claro aumento en el índice de deserción en los planteles secundarios públicos o liceos.

El 50% de los hogares encuestados (Cross Beras: 18) en varias zonas rurales presentaba miembros fuera de la casa que enviaban dinero ocasionalmente. En la misma encuesta (Ibíd: 20) se comprobó que más de un 30% de los hijos emigraban a otros lugares y que un 7% lo hacía a otros países. La mujer también emigra actualmente, dejando atrás marido e hijos.

En estos años, la disponibilidad de tierra en las zonas rurales ha ido disminuyendo. De 1960 a 1985, la cantidad de tierra disponible por habitante rural decreció de 0.47 a 0.39 ha./habit. (Espinal: 51). En la mayoría de las comunidades rurales, la tierra está en manos de los hombres mayores o de terratenientes que viven fuera de la comunidad. Los jóvenes adultos carecen de tierras y tienen que emigrar. No hay condiciones para formar una familia con una base de sustentación económica suficiente.

Para una parte cada vez mayor del campesinado dominicano actual, *buscarse la vida significa abandonar el hogar (Bendezu: 55)*. Para los jóvenes de las zonas rurales, no hay futuro en la agricultura. Esta conlleva una vida de trabajo físico agotador, pobremente remunerada y sin servicios básicos. Los padres no contradicen esta tendencia, porque ellos mismos sienten una frustración creciente.

Las luchas campesinas por la distribución de tierras han tenido en esta década un impulso menor. Sin embargo, la lucha de la Unión Campesina Autónoma (UCA) por las tierras de Sanché, en la región Noroccidental del país, con una ocupación de terrenos durante 10 meses y con la presencia constante de un sacerdote, el P. Regino Martínez, S.J., tuvo un eco en los medios de comunicación social mayor que lucha alguna. La lucha triunfó con una metodología de ocupación no violenta, que suscitó el apoyo de amplios sectores del país. No obstante, Sanché no ha dado origen a una secuencia de luchas similares.

De hecho, la crisis orgánica por la que atravesó el movimiento campesino en la década de los '80 ha dejado una serie de organizaciones atomizadas y politizadas. Algunas de las estructuras más importantes del movimiento campesino fueron convertidas en soporte de los fines electorales de partidos políticos durante la campaña de 1990. Otras organizaciones se han incomunicado de las demás por obra de dirigentes y asesores caudillistas. La década de los '90 promete grandes presiones al campesinado, pero no encuentra a sus organizaciones en las mejores condiciones para sus luchas reivindicativas.

Las condiciones políticas a partir de 1978, con un grado mayor de democratización, se ha reflejado en una mayor presencia haitiana en el territorio nacional. La importación legal de braceros haitianos, que llegó a 19,000 para la zafra de 1983-1984, ha sido históricamente el mecanismo normal de introducción masiva de haitianos en el país (Vargas: 228). La zafra requiere de unos 100,000 braceros al año. A pesar de los 19,000 braceros importados y de los 26,000 haitianos que vivían entonces en los bateyes, ya para 1980 faltaban unos 50,000 braceros anualmente (Ibid: 229). Los haitianos conformaban entonces el 77% de la fuerza de trabajo en 12 centrales estatales, mientras que los dominicanos ocupaban posiciones de supervisión con cierta capacitación laboral (Ibid: 240).

Desde entonces, el número de haitianos en el país ha aumentado notablemente, haciéndose presentes en otros campos de la actividad agrícola y económica y convirtiéndose en un componente cada vez más importante de la economía dominicana.

El haitiano es un componente ambivalente en la economía y en las representaciones colectivas dominicanas. Por un lado, es imprescindible para la agricultura nacional. Por otro, es un ser socialmente disminuido, menospreciado, un estereotipo más que una realidad. Ambos aspectos se combinan en perjuicio del haitiano.

A lo largo de la zona fronteriza, el jornalero haitiano es un componente esencial de la agricultura. En comunidades donde no se consigue un jornalero dominicano, el haitiano, que trabaja con una baja remuneración y en condiciones sumamente austeras, es quien sustenta el sistema agrario campesino. Por ejemplo, la comunidad del Derramadero,³ proyecto agrario adscrito al IAD, con unas 300 familias dominicanas, llega a tener 400 jornaleros haitianos, algunos permanentes, la mayoría temporarios.

Sin embargo, a pesar de su importancia, en las zonas rurales dominicanas, el haitiano lleva una existencia socialmente marginal, apenas atreviéndose a caminar por un camino vecinal, por miedo a ser apresado por la guardia, viviendo en ranchos sin paredes en la parcela y acercándose a los hogares dominicanos al final de la jornada de trabajo. Es un trabajador desprovisto de derechos, que fácilmente puede ser despojado de lo ganado de regreso a su tierra.

2.4 Estrategias campesinas

En los años '80, la vida campesina dentro de la sociedad dominicana ha dejado de conllevar una imagen socialmente valorada. En unas pocas décadas, la población campesina descenderá a una proporción notablemente baja dentro del conjunto de la población nacional por efecto de la permanencia de la imagen de pobreza que proyecta la vida campesina y la consiguiente emigración.

Pero, la familia campesina no puede transformar su modo de vida rápidamente. Son contadas las familias campesinas que emigran por completo, dejando sólo las ruinas de un piso de cemento abandonado. La unidad doméstica campesina va adoptando soluciones parciales a través de los diferentes miembros de la familia. Algún hijo se envía a estudiar a alguna ciudad de importancia, donde vivirá con parientes que

le facilitarán hospedaje y alimentación. Si es hembra, deberá aportar trabajo doméstico por lo recibido. La ida a la zona franca, con envíos periódicos de dinero al hogar, el traslado a zonas agrícolas con un grado mayor de desarrollo en tierras llanas e irrigadas con la presencia de alguna empresa agroexportadora, y aún eventualmente la salida al extranjero, son formas de ir realizando paulatinamente la transición al medio urbano.

En algunos casos, el agricultor traslada a su familia al centro urbano más cercano, donde logrará poner a estudiar y a trabajar a los hijos. Estos estarán al cuidado de la madre, mientras el padre se resigna a una vida repartida entre la propiedad agrícola durante los días de semana y el hogar en fines de semana. Este agricultor ahora cuenta con una ayuda muy limitada de parte de sus hijos para las tareas agrícolas. La familia va dejando así de ser una unidad productiva. Es sólo una unidad doméstica, en muchos casos, con una pareja dislocada.

La mujer ha ido ocupando en el conjunto de estrategias económicas familiares un lugar más determinante que en el pasado. El proceso de formación de organizaciones femeninas -centros de madres, clubes de amas de casa, etc.- a lo largo de los últimos 20 años, ha iniciado a un número significativo de mujeres a una vida con mayores relaciones sociales y a un papel económicamente productivo. La mujer no se reduce ya a una función doméstica reproductiva. Se ha determinado que la participación en el trabajo agrícola de la unidad familiar campesina se da en el 74% de las mujeres campesinas. Estas participan en "tareas de apoyo", llevando agua y cocinando para los peones, etc., así como en tareas de recolección y desgrane (CIPAF: 18).

Más importante aún, la encuesta de CIPAF determinó que el 84% de las mujeres rurales de 10 años y más aportaba alguna forma de ingreso a la economía familiar (Ibid: 25), a diferencia del 32% que indicaban las estadísticas oficiales dominicanas. Y esta participación se da independientemente de la forma que pueda presentar la estructura del grupo familiar (Ibid: 27).

La actividad femenina se concentra en la pecuaria menor (63%), la actividad agrícola en la parcela familiar (55%) y en el trabajo asalariado

(Ibid: 31). Si bien las asalariadas constituyen el 14% de las mujeres rurales activas, la mayoría de las mujeres combina el trabajo doméstico, reproductivo, con labores productivas al interior de la familia.

Las organizaciones femeninas han provisto a muchas mujeres de entrenamiento en proyectos agropecuarios, en la elaboración de conservas, en la confección de ropa, en la administración de recursos obtenidos por préstamos, etc. Al mismo tiempo ha ido surgiendo una nueva conciencia del valor de la mujer, a la que el hombre campesino se va adaptando, a veces a gusto, a veces a disgusto. Esta participación creciente de la mujer en el desenvolvimiento económico del hogar a su vez prepara a las hijas a asumir papeles cada vez más activos al interior de la unidad doméstica.

3. Uso y conservación de los recursos

El sector agropecuario ha desarrollado sus actividades en condiciones cada vez más precarias. El sector recibe sólo el 17% de la cartera total del sistema financiero formal (JACC: 49). Los recursos destinados al sector se han mantenido en forma tal que el crédito ha sido insuficiente para las necesidades agrícolas.

Dentro de la cartera total destinada a la agropecuaria, el sector privado aporta el 64%, con una contribución que crece a una tasa mayor que la del sector público (Ibid: 51). Al interior del campesinado, los pequeños campesinos, con menos de 100 tareas, recibieron en 1987 el 37% de los recursos facilitados por el Banco Agrícola, la institución que provee la mayor parte de la cartera pública destinada a la agropecuaria. En cambio, los campesinos medianos, con propiedades menores de 500 tareas, recibieron el 59% de los recursos (Ibid: 52).

La agricultura se ha ido tecnificando en los últimos años, especialmente en zonas de agricultura intensiva, con regadíos y uso de productos químicos. En cambio, en las zonas montañosas, el campesino serrano no ha logrado transformar el modo de producción tradicional.

En los últimos años, los servicios de extensión agropecuaria suministrados por la Secretaría de Agricultura han sido cada vez menos significativos. El trabajo de los técnicos ha carecido de apoyo en

préstamos, semillas e insumos, sin hablar del transporte de los mismos técnicos al campo. Para un campesinado que apenas varía sus métodos de trabajo, es muy poco lo que se ha invertido en cambiar su mentalidad y sus usos y muy escasos los estímulos que se han dado al productor.

El territorio dominicano ha sufrido un proceso acelerado de deforestación, perdiendo 379,000 has. de bosques en los últimos 22 años. En conjunto, el 80% del territorio nacional ha sido desprovisto de cubierta vegetal leñosa, lo que causa una alta tasa de erosión de los suelos (Morell: 13). Numerosos ríos, arroyos y cañadas han desaparecido. Los ríos más importantes han disminuido su caudal con índices que van desde un 21 a un 35% (Ibid: 9).

Las necesidades de los hogares dominicanos, en que la mayoría cocina los alimentos en base a carbón vegetal y leña, acelera este proceso, para el que no hay soluciones rápidas.

El volumen total de leña y carbón vegetal consumida al año en el país significa la intervención en un área de 152,450 has. (Ibid).

La agricultura de corte y quema del campesinado de montaña contribuye también a la deforestación. El agricultor serrano, dejado a sus técnicas tradicionales, destruye paulatinamente su propio habitat, ya que no tiene una posición conservacionista hacia los recursos naturales. Las leyes forestales estimulan a los grandes inversionistas a invertir en proyectos agroforestales, en algunos casos obteniendo fraudulentamente títulos de tierras del Estado donde los campesinos han vivido por décadas, sin que éstos tengan oportunidad de establecer sus legítimos derechos a la tierra por ocupación ininterrumpida.

Este campesino no encuentra leyes forestales que lo estimulen a la siembra de árboles. Sabe que en el futuro no podrá disponer de ello, y lógicamente, se niega a invertir en un producto que le será arrebatado.

En las zonas cafetaleras es donde se ha podido apreciar un grado mayor de incorporación de técnicas de conservación de suelos, ya que los servicios de extensión han contado con el apoyo de organizaciones estables de campesinos cafetaleros, a menudo con recursos propios, y con cierto apoyo oficial para tareas de mejoramiento.

La combinación de una legislación forestal deficiente, de un organismo supervisor principalmente represivo, como la Dirección General de Foresta, y la falta de educación para la conservación de los recursos naturales disponibles crearán una presión cada vez más creciente sobre el campesino de la sierra.

La emigración seguirá siendo la salida natural. El vaciamiento de las comunidades rurales se verá acompañado por la adquisición de tierras por parte de compañías agroforestales más interesadas en beneficios económicos que en la conservación de los recursos naturales.

La alteración de este rumbo podría producirse si se destinan recursos a la educación del campesino, si se promulgan leyes forestales más constructivas y si los organismos estatales asumen un papel más positivo. Pero la suma de estos elementos no será fácil, ya que el Estado sigue priorizando otras dimensiones de la vida nacional.

Por lo general, pues, el campesinado se encuentra solo, desamparado ante un mercado que él no controla, ante un Estado que le ha asignado un rol secundario en cuanto a la asignación de recursos públicos y de un sector financiero privado que favorece al gran productor.

A modo de conclusión

Los cambios experimentados por la sociedad dominicana en las últimas décadas, y principalmente en la de los '80, han impactado negativamente en las condiciones de vida del campesinado. La crisis rural que se inició en los años '70 no ha sido superada. Por el contrario, mantiene una tendencia a profundizarse ante la ausencia de medidas encaminadas a enfrentarla.

Los factores estructurales de la crisis rural permanecen inalterables. El binomio latifundio-minifundio parece perpetuarse, a pesar de existir una legislación agraria que no se aplica. El éxodo de los habitantes rurales hacia las ciudades y pueblos profundiza la crisis, ya que los emigrantes constituyen la población joven campesina, lo que deja la actividad agrícola en los padres y abuelos y socava la capacidad productiva del campesinado.

El Estado dominicano acelera el proceso de descampesinización al implementar un modelo de desarrollo que prioriza el desarrollo urbano y la generación de divisas a través de la construcción, el desarrollo de zonas francas y la dedicación de las mejores tierras del país a la producción de rubros de exportación.

El proceso de modernización de la agricultura, a nivel del marco jurídico que se va creando y de los recursos asignados, tanto públicos como privados, se realiza por encima de la pequeña unidad campesina, lo que constituye una presión más hacia la marginalidad de la vida campesina.

El impacto de la crisis rural en el medio ambiente ha sido considerable, puesto que el campesino sin tierra y sin trabajo se ve llevado a reducir aún más la cubierta de bosques del país y, lo que es peor, se descubre convertido en enemigo del bosque donde nació por efecto del paquete de leyes forestales rígidas y discriminatorias. Como resultado de todo esto, la pobreza de la familia campesina adquiere características dramáticas. Los indicadores de educación, salubridad, nutrición y vivienda entre otros se hallan entre los más bajos de América Latina y del Caribe. Mientras tanto, la brecha entre ricos y pobres se abre aún más y las ciudades se llenan de campesinos dedicados a la subsistencia económica precaria: "chiriperos", "motoconchistas" y otras actividades del sector económico informal.

A manera de recomendaciones, creemos que el Estado dominicano debe revalorizar la población rural, que constituye una parte considerable, aunque minoritaria, del pueblo dominicano. Para esto, se impone definir una estrategia de desarrollo rural, integral, que conlleve una modificación del espacio rural, principalmente la estructura de tenencia y uso de la tierra. La economía campesina puede recuperarse mediante la viabilización de un mercado que estimule la producción para el mercado nacional.

El campesinado debe acelerar su paso hacia la conquista de una mayor participación en la formación de una opinión pública y en el proceso de toma de decisiones en el escenario nacional a través de una reconstrucción de sus organizaciones, de su vinculación, de una reno-

vacación de sus líderes y de un replanteo de sus objetivos y principios ideológicos.

Al campesino debe dársele y debe luchar por tener su lugar en las leyes y políticas de conservación y uso de los recursos naturales con una legislación que contemple su rol de agente en contacto permanente con los recursos del país y con una asesoría que le permita desempeñar su papel y encontrar en él la aspiración última del campesino: vivir en comunión con la tierra, con los demás y con Dios.

NOTAS

1. El concepto, tomado de Del Rosario: 10, alude a "una unidad económica que se concretiza en un modo específico de usar la tierra ordenando de una cierta manera el trabajo, los recursos, el riesgo, etc."
2. Algunas de estas características corresponden al modelo de la economía campesina de Chayanov, citada por Del Rosario: 8.
3. Nombre ficticio.

BIBLIOGRAFIA

- Bendezu Alvarado, Guillermo: **Estudio de la realidad campesina y sus alternativas de desarrollo**, IAD, Santo Domingo, 1981.
- Campos, Carlos: **El problema agrario y el ajuste estructural en Costa Rica**. Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional Heredia, Costa Rica, 1991.
- CIPAF: **Con trabajo de mujer: Condiciones de vida de la mujer rural**, 2da. edición, Santo Domingo, 1991.
- Cross Beras, Julio et al.: **La mano de obra rural en la República Dominicana**. UEPA, Santiago, 1990.
- Del Rosario, Pedro: **Azúcar, agroempresas y campesinos en la República Dominicana**, CEUR, PUCMM, Santiago.

- Del Rosario, Pedro J. y Yunén, Rafael E.: **Los fenómenos migratorios relacionados con los cambios tecnológicos en la agricultura dominicana**, CEUR, PUCMM, Santiago, 1991.
- Díaz Santana, Mirian et al.: **Población y educación en la República Dominicana**, Instituto de Estudios de Población y Desarrollo, Santo Domingo, 1990.
- D'Oleo, Frank: **1990: Crisis agraria, dominación agroindustrial y descampesinización**, Serie Análisis de Coyuntura, Nº 6, CEDEE, Editora Taller, 1ª edición, Santo Domingo, 1991.
- Espinal, Juan José: **La política de precios agrícolas. La incidencia en la oferta de alimentos**, Santo Domingo, Taller, 1987.
- García, Antonio, **El nuevo problema agrario en América Latina**, UNAM, México, 1981.
- IICA: **América Latina y El Caribe: pobreza rural persistente**, IICA, San José, Costa Rica, 1990.
- JACC: **Diagnóstico del sector agropecuario. Estudio macroeconómico**, Junta Agroempresarial de Consultoría y Coinversión (JACC/RD), Santo Domingo, 1989.
- Morell, Merilio G.: **Situación forestal en la República Dominicana**, Fundación para el mejoramiento humano (Progressio), Amigo del Hogar, 2ª edición, Santo Domingo, 1988.
- Ramía S., José y Boin, Jacqueline: **Agonía del sector tradicional de exportación**. Editora Corripio, Santo Domingo, 1991.
- Rodríguez, Frank: **Campesinos sin tierra**, Editora Taller, Santo Domingo, 1987.
- Rodríguez Núñez, Pablo y Pérez, Francisco: **Diagnóstico y políticas del sector agropecuario**, UEPA, Santiago, 1990.
- Sánchez Roa, Adriano: **F.M.I., Agricultura y pobreza**, Editora Corripio, Santo Domingo, 1989.
- Vargas-Lundius, Rosemary: **Peasants in distress. Poverty and Unemployment in the Dominican Republic**, Lund, Suecia, 1988.